

Mañana 6 noviembre / 1990

El Precio de los Votos

Miguel Angel Granados Chapa

Cada voto que se emita en las elecciones federales de 1991 le costará al gobierno unos 38 mil pesos, que es un precio módico si de él se deriva un buen impulso a la democracia. La cifra resulta de imaginar que acudan a las urnas, en la tercera semana de agosto próximo, para elegir 500 diputados y 32 senadores, los mismos 20 millones de votantes que lo hicieron en 1988; y de saber que el Instituto Federal Electoral ha presentado un presupuesto de gastos, para esos comicios (y su propia instalación) por 742 mil 564 millones de pesos.

Imaginamos que la cifra de votantes puede ser igual el año próximo que hace dos, porque se anularían un factor en pro de disminución y otro en favor de su aumento. Serían menos los de una elección intermedia, en que no está en juego la Presidencia de la República ni la fuerza atractiva que tuvieron los candidatos a ese cargo en 1988. Serían más por el simple crecimiento de la población y el probable aumento de la conciencia cívica.

De cualquier modo, lo cierto es que el IFE gastará casi 800 mil millones de pesos. Bueno, quizá no es tan cierto. Al referirse a ese punto en su informe del pasado jueves, el presidente Salinas practicó una inquietante corrección a la versión escrita del documento, en el momento de leerla. En el cuaderno impreso se lee que "el gobierno ha destinado importantes recursos presupuestales para ello". Salinas sustituyó "destinado" por "comprometido", quién sabe si por escrúpulo frente al poder que debe aprobar el gasto público y no lo ha hecho todavía, o porque no se ha llegado aún a la etapa definitiva en la fijación del monto, y la cifra puede entonces variar.

El costo electoral se forma de modo importante con el financiamiento a los partidos políticos, que el año entrante deberá totalizar más de 100 mil millones de pesos, de los cuales por supuesto que la parte del león es para el Partido Revolucionario Institucional, pues la masa de recursos se distribuye según el número de votos, y para efectos oficiales el partido gubernamental sumó poco más de la mitad de los emitidos hace dos años.

En cambio, el Partido de la Revolución Democrática obtendrá un magro estipendio porque heredó el registro del Partido Mexicano Socialista, que obtuvo una muy pobre cosecha de sufragios merced el apoyo que a última hora brindó a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Este, por cierto, resulta autor de la relativa bonanza económica que ha disfrutado en el último tiempo el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, dirigido por su acérrimo enemigo Rafael Aguilar Talamantes. Nunca antes el partido de ese dirigente había obtenido el número

de votos que la influencia de Cárdenas produjo en su favor, en términos que ahora se traducen en dinero, mucho después de la ruptura entre Cárdenas y Aguilar Talamantes, por la inverecundia de éste.

Llama la atención que uno de los componentes, nada desdeñable, del financiamiento a los partidos sea la subrogación de las contribuciones que los legisladores tendrían que aportar. La cantidad suma casi 20 mil millones de pesos y deriva de una práctica instituida por la oposición, inicialmente la panista y que en el caso de los comunistas (cualquiera que fuese la sigla en que se agruparon a lo largo de su breve pero agitada trayectoria parlamentaria) llegó a extremos notables. El PAN determinó que los diputados de partido que por racimos tuvo a partir de 1964, entregaran parte de sus dietas al partido que los llevó a las curules, para aminorar las penurias partidarias. Cuando el PCM, y también el PMT, llegaron a la cámara, prácticamente la totalidad de los haberes de sus diputados iba a dar a la caja del partido, lo cual generó en más de una oportunidad enojosa incidentes, cuando algún legislador, menesteroso o mezquino se negó a hacer la entrega pactada.

Aparte el financiamiento a los partidos, el otro rubro importante en el gasto electoral es el destinado al nuevo padrón, que no costará 200 mil millones de pesos, como originalmente se estimó, sino exactamente lo doble: 399 mil 192 millones de pesos.

El padrón se confeccionará de acuerdo con la técnica censal, mediante entrevistas casa por casa, para integrar el catálogo general de electores, que son los mexicanos mayores de 18 años. Según el IFE, todo ello requiere "la contratación, movilización y abstecimiento de visitadores domiciliarios, validadores, auxiliares municipales, distritales, delegados, comunicadores, capacitadores, cartógrafos y personal administrativo".

Cuando su tarea haya concluido, se gastará en la manufactura de las nuevas credenciales, y en su entrega, todo lo cual, además, deberá hacerse en un plazo perentorio, antes del tercer domingo de agosto de 1991.

El IFE estará integrado por casi 8 mil personas, contratadas temporal o permanentemente para organizar y administrar las elecciones.

Se trata de un número elevado, surgido de la compleja composición orgánica nacida del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que crea autoridades colegiadas y un cuerpo profesional en los tres niveles de la organización electoral: federal, estatal y distrital. El costo de instalación y primer año de operación del Instituto Federal Electoral ascenderá a unos 240 mil millones de pesos.

Como se ve, la democracia cuesta. Pero no mucho.